



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/HRC/7/G/1
15 de noviembre de 2007

Original: ESPAÑOL

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Séptimo período de sesiones
Tema 3 del programa

**PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS,
CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES,
INCLUIDO EL DERECHO AL DESARROLLO**

**Nota verbal de fecha 26 de octubre de 2007 dirigida a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
por la Representación Permanente del Perú**

La Representación Permanente del Perú ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás organismos internacionales con sede en Ginebra, saluda muy atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -en especial a la Secretaría del Consejo de Derechos Humanos- y, con relación al informe presentado por el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio de los pueblos a la libre determinación a raíz de su visita al Perú en enero y febrero pasados, tiene a bien remitir la respuesta* elaborada por el Gobierno del Perú sobre el mismo, del cual se apreciará su distribución como documento del Consejo.

* Se reproduce en el anexo como se ha recibido y en inglés.

Anexo

RESPUESTA DEL PERÚ AL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MERCENARIOS COMO MEDIO DE VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS Y OBSTACULIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN

El Gobierno peruano desea en primer lugar agradecer el informe preliminar presentado por el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación (en adelante el Grupo de Trabajo o GT) de 25 de junio de 2007, y especialmente las conclusiones y recomendaciones presentadas como fruto de la visita que realizó entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 2007, las cuales el Perú acoge con interés.

La visita, que se produjo dentro del marco de la invitación abierta que el Estado peruano extendió a los procedimientos especiales en 2002, representó una oportunidad para reiterar el compromiso del Perú con el sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos, así como la oportunidad de entablar un diálogo fructífero entre las distintas autoridades con los representantes del Grupo¹, en especial sobre todos aquellos puntos que pueden contribuir a mejorar la vigencia de los derechos humanos, considerando que el GT, en el ámbito de su mandato, "estudia y determina cuestiones, manifestaciones y tendencias que están surgiendo con respecto a los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos y sus repercusiones sobre los derechos humanos, en particular sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación"².

¹ En el ámbito nacional las reuniones de trabajo incluyeron con el Viceministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez Reinel; el Viceministro de Defensa, Fabián Novak; la entonces Ministra del Interior, Pilar Mazzetti; la Ministra de Trabajo, Susana Pinilla; la Ministra de Justicia, María Zavala Valladares; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Távara Córdova; el Fiscal Superior de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, Juan Coraje Carranza; el Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, Raúl Castro Stagnaro; el Presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Aldo Estrada Choque; el entonces Secretario de Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Lázar; el Defensor Adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, Eduardo Vega Luna; y el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Doctor Luis Alberto Salgado Tantte. De manera adicional, sostuvieron reuniones con la Decana del Colegio de Abogados de Lima, con el ex Relator de las Naciones Unidas de la Convención Internacional contra la Utilización de Mercenarios, Enrique Bernal Ballesteros y con representantes de varias organizaciones no gubernamentales (Coordinadora de Derechos Humanos, APRODEH y el Instituto de Defensa Legal), así como con representantes de las víctimas y de las empresas DEFION Internacional y Wackenhut Perú.

² Resolución 2005/2 de la Comisión de Derechos Humanos, "Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación".

En ese sentido, el contenido del informe constituye un gran aporte para la comprensión de nuevos desafíos que pueden existir con relación al tema. En este contexto, el Gobierno peruano desea formular, con espíritu constructivo, algunos comentarios puntuales respecto al mismo, los cuales se detallan a continuación.

1. Con relación al capítulo referido al reclutamiento y entrenamiento militar de ciudadanos peruanos por parte de empresas de seguridad privada para prestar servicios en el Iraq y otras zonas en conflicto, el Perú comparte con el Grupo de Trabajo la preocupación sobre el particular, por las actividades que estas personas realizan en el Iraq y el Afganistán en circunstancias que ponen en riesgo sus vidas y sin que sus derechos sean respetados plenamente. En ese sentido, el Perú lamenta que ello ocurra, pese a los esfuerzos desplegados por el Gobierno para evitar este tipo de situaciones.

Al respecto, cabe resaltar algunas de las medidas tomadas por el ejecutivo como consecuencia inmediata de la visita del GT, las cuales tienen por objeto hacer frente a este tipo de situaciones. Una primera acción fue la adhesión del Perú a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, mediante Decreto supremo N° 008-2007-RE. El instrumento de ratificación fue depositado en la sede de las Naciones Unidas el pasado 23 de marzo. Ello es una clara muestra del renovado compromiso del Gobierno peruano no sólo en la lucha contra dichas actividades, sino además en la salvaguarda y mantenimiento de la seguridad pública, la ley y el orden, con arreglo al derecho nacional e internacional. Con esta medida, el Perú se convirtió en el quinto país de América Latina y el Caribe y en el vigésimo noveno Estado a nivel mundial en ratificar el citado instrumento.

De manera complementaria, se puede destacar las acciones emprendidas a nivel interno orientadas a adecuar la legislación peruana a dicha Convención. En este sentido, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República viene evaluando un proyecto de ley contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios. Dicho proyecto prohíbe la celebración de contratos de trabajo o de naturaleza civil que tengan como prestación el brindar seguridad o servicios especializados de guerra o cualquier otra forma de colaboración en zonas de conflicto armado e incorpora en el Código Penal la tipificación como delito la actividad mercenaria y el reclutamiento de mercenarios.

Estas acciones se suman a iniciativas legislativas previas presentadas por el Gobierno para reglamentar las actividades de empresas de seguridad privada, especialmente la promulgación en 2006 de la Ley N° 28879, Ley de servicios de seguridad privada, sobre la cual se está preparando el reglamento para su aplicación; al igual que la Ley N° 28806, Ley general de inspección del trabajo; y la Ley N° 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

2. En lo que respecta a las actividades, operaciones, funcionamiento y control de las empresas de seguridad privada en el Perú, se desea resaltar algunas preocupaciones.

En primer lugar la resolución 2005/2 de la entonces Comisión de Derechos Humanos es muy clara al determinar el mandato del Grupo de Trabajo, cuya acción estará centrada en cinco acciones principales:

- a) Elaborar y presentar propuestas concretas sobre nuevas posibles normas, directrices generales o principios básicos que promuevan el aumento de la protección de los derechos humanos, en particular el derecho de los pueblos a la libre determinación, cuando hacen frente a amenazas actuales y nuevas que suponen los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos;
- b) Recabar opiniones y contribuciones de los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales sobre las cuestiones relativas a su mandato;
- c) Vigilar a los mercenarios y las actividades relacionadas con ellos en todas sus formas y manifestaciones en distintas partes del mundo;
- d) Estudiar y determinar las cuestiones, manifestaciones y tendencias que están surgiendo con respecto a los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos y sus repercusiones sobre los derechos humanos, en particular sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación;
- e) Vigilar y estudiar las repercusiones de las actividades de empresas privadas que ofertan en el mercado internacional servicios de asistencia, asesoría y seguridad militares, sobre el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho de los pueblos a la libre determinación, y preparar un proyecto de principios básicos internacionales que promueva el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas en sus actividades.

Adicionalmente, la labor desempeñada por la mayor parte de empresas privadas en el Perú así como los servicios de seguridad municipal no parece estar incluida dentro del ámbito de competencias del Grupo de Trabajo, más aún si se tiene en cuenta lo dispuesto en la resolución 61/151 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada "Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación", en cuyo párrafo operativo 12 pide al Grupo de Trabajo continúe con la labor que viene realizando teniendo en cuenta la definición jurídica de mercenario propuesta por el Relator Especial en su informe que presentara ante la 60° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

En dicho informe, el Dr. Enrique Bernalles plantea la problemática de la ausencia de una definición jurídica amplia e inequívoca de mercenario. A efectos de aproximarse a la misma, el Dr. Bernalles plantea una serie de supuestos, en los cuales, bajo ningún aspecto, están comprendidos los servicios de seguridad privados y municipales a los cuales se refiere el informe del Grupo de Trabajo ya que no se trata de ninguna acción de tipo delictivo ni de actividades vinculadas a la libre determinación de los pueblos, desestabilización de gobiernos constitucionales, tráfico ilícito, terrorismo y en general violación de derechos fundamentales.

Cabe señalar que el Gobierno peruano agradece el interés manifestado por el Grupo de Trabajo al recoger la difícil situación laboral por la que atraviesan las personas que brindan estos servicios, así como algunos problemas que podrían, de manera ocasional, haberse suscitado con respecto a otros ciudadanos; sin embargo, como ya se ha señalado considera que dichas

situaciones vienen siendo objeto de un adecuado seguimiento por parte de las instancias competentes. De igual forma se ha procedido con las denominadas rondas comunales.

3. En lo que se refiere a la tercera parte del informe "Implicaciones en conflictos sociales de algunas empresas de seguridad privada que proporcionan servicios de protección a compañías mineras transnacionales o de extracción de recursos naturales", se hace alusión a distintos casos entre los que destaca el caso GRUFIDES, el cual ha sido ya materia de preocupación de otros mecanismos de derechos humanos tanto a nivel de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano. El Estado peruano viene realizando un diligente seguimiento de estos asuntos, tal como fue informado el Grupo de Trabajo por el Fiscal Superior de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, así como por otras autoridades nacionales. Cabe destacar que, a pesar de no estar vinculado a la temática de los mercenarios, las autoridades competentes de nuestro país brindaron en su momento la información correspondiente por tratarse de asuntos vinculados a la temática de los derechos humanos.

Finalmente, el Gobierno del Perú quisiera resaltar el carácter constructivo de las observaciones expuestas en la presente respuesta, las mismas que se centran en la filosofía que sustenta el proceso de construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos, uno de cuyos objetivos es el de evitar la duplicidad de instancias o que distintos mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos vean interferido su trabajo. Bajo ningún aspecto, el Perú resta importancia a los hechos expuestos por el Grupo de Trabajo en su informe; por el contrario, el Estado peruano acoge con satisfacción el interés del mismo por expresar su preocupación frente a distintos hechos ocurridos en nuestro país, los cuales también son objeto de preocupación para el Gobierno peruano, cuyas instancias competentes vienen realizando el seguimiento correspondiente.

En ese sentido, los comentarios formulados pretenden evitar malas interpretaciones, confusiones o duplicidad de instancias, ya que como se ha mencionado líneas arriba, algunos de ellos vienen siendo abordados ante otras instancias del sistema de Naciones Unidas, con competencia directa para conocer del asunto.

El Perú desea resaltar que la cooperación con los distintos mecanismos del sistema de promoción y protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas es una característica de su política exterior y, en tal sentido, continuará trabajando en esa línea, lo cual no sólo le ha permitido intercambiar experiencias y puntos de vista con expertos internacionales, sino también lograr una mejor comprensión de la problemática en nuestro país y una toma de conciencia acerca de las diversas acciones que se pueden tomar para prevenir eventuales dificultades, y para mejorar la situación de los derechos humanos de todos los peruanos.

Finalmente, el Gobierno del Perú desea reiterar su agradecimiento al valioso esfuerzo realizado por el Grupo de Trabajo.
